

La lucha por el futuro de Bolivia

Federico Fuentes

Después de quinientos años de dominación y colonialismo, de más de cincuenta años desde la introducción del sufragio universal y tras cinco años de intensa lucha social, en diciembre de 2005 la mayoría indígena de Bolivia eligió por primera vez como presidente a uno de los suyos, el líder de los cocaleros y dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. La victoria, con más del 50% de los votos, fue más que una señal del rechazo de veinte años de Gobierno neoliberal. El activista peruano Hugo Blanco resumía la importancia del hecho al escribir: «el nuevo presidente no es el resultado de unas simples “elecciones democráticas” como las que tienen lugar en muchos de nuestros países; es un paso importante en el camino de las organizaciones populares bolivianas en su lucha por tomar el poder en sus manos».¹

La elección de Morales señalaba la aparición de un proyecto nacional alternativo para el país más pobre de Sudamérica, a remolque de un nuevo ciclo de lucha revolucionaria inaugurado en el año 2000 por, simultáneamente, la «guerra del agua» contra la privatización en Cochabamba, la rebelión aymara en el altiplano (la planicie al oeste de La Paz) y la resistencia de los cocaleros en la región de Chapare. Mediante una combinación de lucha en las calles y batallas parlamentarias, una política de creación de alianzas sólidas y de acumulación de fuerzas sociales y concentrándose en

• Artículo publicado en *MR*, vol. 59, nº 3, julio-agosto de 2007, pp. 95-109. Traducción de Joan Quesada. Federico Fuentes colabora frecuentemente en el periódico socialista australiano *Green Left Weekly*, y mantiene el blog Bolivia Rising [La sublevación de Bolivia].

los deseos nacionales clave del pueblo (el control de los recursos naturales y una asamblea constituyente), Morales y los dirigentes del MAS han forjado un poderoso movimiento nacional de liberación.

Contienda entre las «dos Bolivias»

Una reciente sucesión de acontecimientos, desencadenada por la aprobación de una nueva ley de reforma agraria como parte de la «revolución agraria» de Morales, ha puesto de relieve la polarización política de la que es presa Bolivia en la actualidad. El 28 de noviembre de 2006, ante miles de campesinos vitoreantes en La Paz, el presidente de izquierdas anunció que el Senado había logrado la aprobación de la ley gracias a que tres senadores habían roto filas con la oposición, que había boicoteado al Senado y había evitado que se reuniera.

El paso dado otorgaba al Gobierno mayores poderes para redistribuir las tierras que no desempeñaban ninguna «función social». En represalia, la oposición de derechas intensificó su campaña de desestabilización. El 15 de diciembre se celebró una serie de cabildos (asambleas locales abiertas) en los cuatro departamentos (o provincias) orientales. Los mayores de dichos cabildos, celebrados en Santa Cruz, congregaron a medio millón de personas en las calles. La asamblea decidió no reconocer la nueva Constitución que estaba preparando la Asamblea Constituyente, que había iniciado las reuniones en agosto de 2006, si no incluía una autonomía departamental que concediera un alto grado de independencia política y económica a los gobernadores.

Ese mismo día, el gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, convocaba un nuevo referéndum sobre la autonomía de su departamento y declaraba su apoyo a la «independencia de Santa Cruz». A pesar de que más tarde afirmaría que la referencia a la «independencia» había sido un error, sus declaraciones, en un departamento en el que el 64% de los votantes habían rechazado la autonomía en un referéndum nacional el 2 de julio y en el que Morales y el MAS gozaban de un apoyo particularmente fuerte, indicaba su determinación de desencadenar una confrontación.

Para el 8 de enero de 2007, decenas de miles de campesinos, en su mayoría indígenas, de cocaleros y de irrigadores de agua, junto a obreros y miembros de otros movimientos sociales, habían ocupado el centro de la ciudad de Cochabamba para exigir la dimisión de Reyes Villa.

La indignación de los manifestantes creció tras sufrir los ataques de la policía, y quemaron parte del edificio que alojaba la sede de la Goberna-

ción. El 11 de enero, habitantes de los barrios de clase media del norte de la población, incitados por Reyes Villa y por los medios de comunicación, marcharon sobre el centro de la ciudad armados con bastones, palos de golf y armas de fuego para enfrentarse a los campesinos. Atravesaron las líneas policiales y atacaron brutalmente a los campesinos. En las varias horas que duraron los choques callejeros, más de un centenar de personas resultaron heridas y se produjeron dos muertes. Solo la intervención de Morales, quien pidió a los participantes que pusieran fin a las manifestaciones y optó por una salida constitucional a la crisis mediante una ley que permitiera la retirada de cargos electos, desactivó la amenaza de que la confrontación se extendiera.

Todos esos acontecimientos ponían crudamente de relieve la existencia de dos bloques sociales en competencia por la hegemonía en relación con el futuro del país, una lucha centrada principalmente en el control de las reservas de gas de Bolivia, las segundas mayores de Latinoamérica. La batalla sobre si Bolivia debería seguir dependiendo de las compañías transnacionales y del mercado exterior o debería avanzar hacia un proceso de industrialización integral del país centrada en el gas y en la integración energética regional, a fin de romper con la dominación imperialista, ha seguido alimentando la confrontación.

En un lado están las élites empresariales proimperialistas del departamento oriental de Santa Cruz, con vínculos directos con las multinacionales del gas, con las grandes empresas agrícolas y con la embajada estadounidense. Su rostro público es el comité cívico de Santa Cruz y los cuatro cargos de gobernador que controla la oposición. Mediante una campaña concertada, han empezado a atraer a sectores de la importante clase media boliviana, muchos de los cuales votaron por Morales pero apoyaron a los partidos de la oposición en las elecciones de los gobernadores de los departamentos.

En el otro lado están los indígenas combativos y los movimientos sociales arraigados en las planicies occidentales y en el centro de Bolivia, pero que también están presentes en el este. Junto a las clases medias, fueron ellos los que eligieron al primer presidente indígena de Bolivia en 2005. La victoria de Morales el 18 de diciembre de 2005, con el 54,7% de los votos, fue el resultado de dos factores interrelacionados. En primer lugar, después de cinco años de intensas luchas sociales, la elección venía a marcar la unión de las clases oprimidas de Bolivia y el estallido de una revolución nacional, liderada por primera vez por la mayoría indígena del país. En segundo lugar, anunciaba la apertura de una salida a la crisis histórica del Estado boliviano, consecuencia de la colonización interna y la dominación imperialista.

Aún está por decidir cómo se resolverá ese experimento social, centrado en una estrategia de toma del poder y utilización de los recursos naturales del país para construir una Bolivia radicalmente nueva. Bolivia está en el punto de mira del imperialismo, que la ve como el eslabón más débil en un eje bolivariano cada vez mayor. El papel de Morales como presidente indígena dentro de dicha alianza, que busca conscientemente el despertar de los movimientos indígenas en la región, es de crucial importancia. El Gobierno indígena de Bolivia representa la línea de pleamar de la lucha por la autodeterminación indígena en las Américas, un gran salto hacia la consolidación del derecho de los pueblos indígenas a hacer valer el gobierno de la mayoría en el marco de un país plurinacional.

El Gobierno de Morales ya ha empezado a topar con diversos obstáculos, no solo en forma de resurgimiento de la derecha, sino también de tensiones internas dentro del movimiento y, a veces, de fuertes focos residuales de desunión entre algunos de los propios pueblos indígenas.

El destino de Bolivia está en manos de la capacidad de dirección de Morales y de los poderosos movimientos sociales del país. El historial tanto pasado como presente de esta nación rebelde, junto con la vía emprendida por el Gobierno de Morales, deja margen para ser optimistas.

De la resistencia al poder

La creación del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) en 1990, más conocido normalmente como MAS, el nombre con el que concurre a las elecciones, supuso un importante avance en la historia de la lucha de los pueblos indígenas bolivianos. Arraigada en el movimiento cocalero de la región de Chapare y los Yungas, la organización surgió como una respuesta política a la «guerra contra la droga» impuesta por los Estados Unidos.

Entre la década de 1970 y principios de la de 1990, la región de Chapare experimentó un aumento de población alimentado por diversos factores. En la primera mitad de la década de 1980 se produjo un fuerte aumento del precio de la coca, que coincidió con la ola de sequía de 1983 en la región del altiplano y con la «reubicación» de más de 20.000 mineros bolivianos como consecuencia de la privatización de las minas en 1985. Todos esos acontecimientos dieron lugar a una fuerte migración del pueblo indígena de los aymara, entre los que se encontraba la familia de Evo Morales, y de los mineros, lo que hizo que se sumaran la fuerte identidad indígena de los primeros con la militancia sindical de los segundos.

Ambas corrientes políticas radicales se fundieron en los ya existentes sindicatos cocaleros, que empezaron a funcionar más como poderes locales que como sindicatos, regulando la distribución de la tierra entre los individuos, realizando transacciones con las instituciones del Estado en nombre de los cocaleros, mediando en las disputas locales y organizando trabajos comunitarios tales como el mantenimiento de las infraestructuras, la edificación de escuelas y la reparación de las carreteras.² Con la intensificación de la «guerra contra la droga» en la segunda mitad de la década de 1980, los sindicatos empezaron a crear comités armados de autodefensa para proteger su medio de vida. Aunque la composición social de los sindicatos estaba hecha de propietarios individuales, gracias a tales estructuras, a la conservación de las prácticas comunales indígenas y a la experiencia colectiva de combate contra la intervención militar se crearon fuertes lazos de solidaridad y fuertes sentimientos antiimperialistas.

A principios de la década de 1980, los sindicatos no solo estaban divididos localmente en seis federaciones distintas, sino que estaban también estratégicamente afectados por el hecho de que cuatro de estas estaban asociadas en el nivel nacional con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y dos estaban asociadas con la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB). Sin embargo, la lucha contra la militarización de la región contribuyó a la unificación de los seis sindicatos cocaleros distintos en las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, lo que representaba la aparición de una nueva dirección dentro del movimiento cocalero. Dirigidos por Morales, los cocaleros se convirtieron en el núcleo de la resistencia nacional al imperialismo. El poderoso símbolo de la hoja de coca (que no solo confería un medio de vida digno a los cocaleros, sino que englobaba también la resistencia sostenida de las culturas indígenas milenarias contra el colonialismo extranjero), junto con una política consciente de formación de alianzas, contribuyó a extender la influencia de los cocaleros y el apoyo a estos de toda la nación. Dicha extensión se vio reforzada cuando los cocaleros de predominio quechua se hicieron con el control de la CSUTCB³ a principios de la década de 1990, lo que reflejaba el declive de la corriente katarista⁴ de los aymara, que en la década anterior había experimentado la derrota y la fragmentación.

Mientras tanto, entre los campesinos de la zona oriental empezó a formarse un movimiento autoidentificado como «indígena». Las principales organizaciones que lo conformaban eran la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB, creada en 1982), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG, 1986), la Central de Pueblos Indígenas del Beni

(CPIB, 1987) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC, 1994). En 1990, todos esos grupos emprendieron una marcha desde el este del país hasta La Paz para exigir una asamblea constituyente y una reforma agraria, en lo que fueron las primeras señales de la recuperación de un movimiento explícitamente autoidentificado como indígena que reclamaba su derecho a ser incluido en la sociedad boliviana.

El desarrollo de todos esos grupos estuvo fuertemente influido por dos factores.⁵ En primer lugar, muchos de ellos se crearon en principio como iniciativa de organizaciones no-gubernamentales, que con ese proceso pretendían asegurarse la financiación. Esa dependencia originaria de las ONG provocó la moderación en las reivindicaciones de los movimientos. En segundo lugar, los nuevos movimientos se ubicaban en el corazón de la zona oriental, más rica y blanca, sede de las multinacionales del gas, de grandes terratenientes y de empresas madereras, y eran numéricamente muy débiles. En ese contexto, empezaron a ver en el Estado más a un aliado que a un enemigo.⁶

En 1992, en el marco de los «500 años de resistencia», los cocaleros y los incipientes movimientos indígenas lograron articularse por primera vez. Se propuso la creación de un instrumento político, cosa que ya se estaba debatiendo en el seno de la CSUTCB y en la que insistían mucho los cocaleros, con el objetivo de pasar «de la resistencia al poder». Dicha relación se desplegó al año siguiente con protestas como la Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía, de 1994. En 1995 surgía la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) en el Congreso de Tierra y Territorio e Instrumento Político celebrado en Santa Cruz. De importancia central en la nueva organización eran la CSUTCB, la CSCB, la CIDOB y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia «Bartolina Sisa» (FNMCB-BS).

También en 1995, alineada con la Izquierda Unida (IU) para satisfacer los requisitos legales para presentarse a las elecciones, la ASP logró 47 concejales y diez alcaldías, todas en el departamento de Cochabamba. En muchos casos, sobre todo en la región de Chapare, los consejos fueron esencialmente disueltos y el verdadero poder de toma de decisiones se puso en manos de las asambleas de los sindicatos locales. Alineada de nuevo con IU, la ASP obtuvo cuatro diputados en las elecciones nacionales al Congreso en 1997, entre ellos Morales y Román Loayza, dirigente de la CSUTCB. Las divisiones aparecidas en el seno de la ASP después de las elecciones provocaron la creación del IPSP por parte de Morales, junto con la mayoría de la ASP.

Para el año 2000, el IPSP había empezado a cobrar un carácter fuertemente antineoliberal y antiimperialista, después de ir más allá de la oposi-

ción a la criminalización de la coca y plantear los temas de la soberanía, los derechos de los indígenas, la recuperación de los recursos naturales y la convocatoria de una asamblea constituyente. La fusión en el seno del MAS de indígenas, sindicalistas y corrientes nacionalistas creó un tipo de «nacionalismo indígena» en el que el orgullo indígena se entendía como sinónimo de la creación de una nueva Bolivia dignificada, y en el que las «naciones originarias» se consideraba que eran los mejores defensores de la soberanía y los recursos de Bolivia.

La crisis terminal del Estado

Con el advenimiento del neoliberalismo en Bolivia en 1985, la élite de Santa Cruz, que había ganado influencia económica durante las dictaduras previas, en seguida se dedicó a ocupar directamente posiciones en la administración del Estado y a privatizar la nación. Gracias al establecimiento de varios partidos pro-oligárquicos que «competían entre sí» en la democracia manipulada de Bolivia y gracias a la cooptación de grandes sectores del movimiento indígena mediante un falso discurso de multiculturalidad y relaciones clientelares, lograron hacerse con los resortes de una estabilidad ilusoria. Sin embargo, el nuevo siglo trajo consigo nuevos actores sociales, como la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, que actuó como punta de lanza en la Guerra del Agua, y el resurgimiento de la corriente aymara, reflejado tanto en las sublevaciones periódicas en el altiplano para reivindicar la autodeterminación de los indígenas como en el ascenso de Felipe Quipse dentro de la CSUTCB, que desplazó a la dirección cocalera de habla quechua en 1999 y creó el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) un año más tarde como órgano de representación política de su corriente. En 2002, el MAS quedó segundo en las elecciones presidenciales, en las que Morales perdió por un margen de menos del 2%. Si a eso se suman los votos logrados por el MIP, los partidos indígenas controlaban un tercio del Congreso.

Esa nueva oleada de luchas estuvo provocada por tres elementos de la crisis histórica del Estado boliviano: la falta de desarrollo económico, debida a la sumisión al imperialismo; la exclusión social de los indígenas; y la ausencia de una verdadera representación popular expresada en las estructuras de los partidos políticos existentes.

Con el derrocamiento del presidente Gonzalo «Goni» Sánchez de Lozada en octubre de 2003, las élites de Santa Cruz fueron quedando gradualmente desplazadas de las posiciones clave que tradicionalmente ocupaban y perdieron el acceso directo a la toma de decisiones en el plano nacional.

Los movimientos sociales, que seguían teniendo un carácter regional y defensivo, continuaron fortaleciéndose. Todos esos numerosos movimientos entraron en la arena nacional con el movimiento de insurrección de mayo-junio de 2005, y empezaron a disputar la hegemonía a las élites políticas y económicas.

En fuerte contraste con la sublevación de octubre de 2003, durante la cual sectores que antes habían protestado por separado con reivindicaciones propias se concentraron en El Alto y en la zona occidental unidos en respuesta únicamente a la brutalidad del Gobierno y al grito simplemente de «¡Fuera Goni!», esta vez los distintos sectores sociales lograron unirse en todo el país. Sus reivindicaciones se centraban en la nacionalización del gas, y una mayoría significativa exigía también la convocatoria de una asamblea constituyente.

Al mismo tiempo, la derecha, que ya había empezado a reorganizarse bajo la bandera de la autonomía y había demostrado su fuerza con una manifestación de 150.000 personas en Santa Cruz en enero de 2005, empezó a conspirar para evitar cambios en el sector de los hidrocarburos y para deponer al sucesor de Goni, Carlos Mesa, a quien la élite no consideraba uno de los suyos.

Atrapado entre las dos fuerzas en contienda, Mesa dimitió y creó con ello un vacío de poder. La confrontación era inminente: los dos próximos candidatos a suceder al presidente según la Constitución se consideraba que eran representantes directos de la derecha de Santa Cruz. Los movimientos sociales decidieron colectivamente que, ya que no era posible tomar el poder por la vía de la insurrección, presionarían para forzar la dimisión de los dos próximos candidatos a ocupar al cargo de presidente, lo que allanaría el camino para encontrar una salida constitucional de la crisis mediante unas elecciones anticipadas.⁷ La convocatoria de movilizaciones masivas realizada por Morales y otros líderes en Sucre (donde la derecha había reunido el Parlamento nacional para huir de los movimientos sociales que creía que se limitaban al oeste) y en Santa Cruz demostró que el MAS y los movimientos sociales habían logrado tener un alcance nacional.

Después de que los movimientos sociales forzaran la convocatoria de elecciones anticipadas, la derecha intentó bloquear las elecciones al Congreso, temerosos de perder el poder. Consiguieron imponer una redistribución electoral que otorgaba a Santa Cruz cuatro escaños más en el Parlamento, así como la celebración de las primeras elecciones directas de gobernadores de departamentos.

Dentro de la izquierda se produjo un realineamiento. Ninguno de los movimientos externos al MAS pudo cohesionarse en torno a un programa

alternativo, lo que reflejaba su debilidad tanto política como territorial. Ni el indigenismo radical de Quipse, ni la ultraizquierda de Jaime Solares, que presidía entonces la bomba que representaba la Central Obrera Boliviana (COB), ni el discurso autonomista de Óscar Olivera, de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, fueron capaces de presentar una plataforma que uniera ni siquiera a unos cuantos de los movimientos sociales en la escala nacional.

En su lugar, fue la plataforma de Evo Morales y Álvaro García Linera (actual vicepresidente), que defendía la formación de una asamblea constituyente y la nacionalización del gas, la que ofreció un catalizador a quienes buscaban la salida de la crisis. El programa del MAS consistía en promover un proceso de *descolonización* del poder y renacionalización de la economía y del Estado. Los resultados de las elecciones al Congreso y a la Presidencia del 18 de diciembre, en las que el MAS recibió más del 90% de los votos en el Chapare, en torno al 80% en El Alto y en el altiplano, un sorprendente 30% en Santa Cruz, además de arrasar con todos los escaños de clase media en La Paz, demostraban la unificación de los oprimidos en Bolivia para respaldar un proyecto nacional de liberación del que los movimientos indígena, campesino y cocalero son la punta de lanza. Era una expresión inequívoca de los deseos y esperanzas de la mayoría indígena, que había arrastrado consigo a grandes sectores de las clases oprimidas para empezar a trazar una nueva vía para Bolivia.

La correlación de fuerzas

El voto cruzado (para Morales como presidente y para candidatos de la oposición en otros cargos) arrojó una situación en la que el MAS, aunque controlaba la cámara de los diputados, era minoría en el Senado, y seis de los nueve departamentos de Bolivia pertenecían a la oposición. Además, tal y como Morales se apresuró a señalar, existía el enorme problema del «Estado colonial»: llegar al Gobierno no era lo mismo que lograr el poder de forma decisiva. Según Morales, «después de escuchar los informes de la comisión de transición, he podido ver cómo el Estado no controla el Estado, sus instituciones. Existe una dependencia total, como hemos visto en la esfera económica, un país transnacionalizado».⁸

Antes incluso de inaugurar su mandato el 22 de enero de 2006, Morales se movió con rapidez para entablar un cambio a su favor en la correlación de fuerzas. Como presidente electo, Morales viajó primero a Cuba y Venezuela, antes de visitar Europa y Sudáfrica, para regresar vía Brasil. El

viaje sirvió, no solo para desarrollar acuerdos comerciales, sino también para mostrar la naturaleza de las alianzas económicas que su Gobierno intentaría construir en el plano internacional. Hacia finales de abril de 2006, Bolivia intensificaba su alineamiento con el eje Cuba-Venezuela entrando en la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) y proponía la creación de «acuerdos comerciales entre pueblos», en oposición al plan estadounidense de desarrollar acuerdos bilaterales de libre comercio a la vista del hundimiento del Área de Libre Comercio de las Américas.

Morales también ha actuado para incorporar a Bolivia en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y ha adoptado una postura muy de defensa del interés público en las negociaciones sobre el precio del gas con Argentina y Brasil, las dos mayores potencias de la región y a las que Bolivia envía la enorme mayoría de sus exportaciones de gas. Tal vez lo más importante sea que Morales ha intentado generar integración desde abajo y llegar a los movimientos indígenas del continente, sobre todo de los Andes. La experiencia y el ejemplo de un Gobierno indígena está teniendo importantes ramificaciones dentro de los debates y las luchas de los pueblos indígenas, algo que el Gobierno de Morales sabe muy bien y que fomenta activamente.

Morales ha señalado también su intención de fortalecer el ala nacionalista del ejército. Su primera actuación ha consistido en retirar a 28 generales responsables de la «crisis de los misiles» (la entrega a los Estados Unidos de los misiles del ejército boliviano de fabricación china durante la Administración del predecesor de Morales, Eduardo Rodríguez) y ha ascendido a oficiales de los puestos intermedios. Además, Morales ha abierto la academia militar a los cadetes indígenas, que anteriormente estaban excluidos.

Durante la nacionalización del gas en mayo de 2005 se movilizó al ejército para ocupar los yacimientos de gas y hacerse con el control de las sedes de las multinacionales gasísticas. Dicho papel permitía a los militares sumarse al sentimiento nacionalista de la gente y recuperar su dignidad con la devolución del gas boliviano al control del Estado. El 9 de febrero de 2007, las escenas se repetían cuando el ejército tomaba la fundición de estaño recién nacionalizada Vinto, en Oruro. Morales también puso al ejército a cargo de los 25 centros técnicos que pretenden formar a futuros técnicos para la industria minera. Igual que sucede en Venezuela, hoy en día el ejército boliviano tiene un papel en programas sociales tales como la lucha contra el analfabetismo, la asistencia sanitaria y la construcción de infraestructuras.

Con todas esas medidas, Morales se ha esforzado en ganar apoyos dentro de un ejército históricamente dividido entre proimperialistas y nacionalistas. Según Maurice Lemoine [corresponsal de *Le Monde* en América Latina], los sectores nacionalistas manifestaron cuál era su postura en la sublevación de mayo-junio de 2005, cuando se acercaron al MAS en apoyo de un golpe civil-militar para nacionalizar el gas y convocar una asamblea constituyente.⁹ Mientras que algunos sectores de la COB reclamaban la aparición dentro del ejército de un «Chávez boliviano», los sectores militares nacionalistas eran conscientes de que solo el MAS podía ofrecer una base de apoyo sólida para tal iniciativa.

En el mismo artículo, un cercano colaborador de Morales cuyo nombre no se especifica hablaba de todos esos acontecimientos: «La propuesta se rechazó. Por muchas dudas que puedan existir sobre el proceso democrático, la gente ha pagado por él con su sangre, con la muerte y con el exilio. No tiene sentido detener el proceso. Y, en cualquier caso, el ejército no habría sido más que un freno». Lemoine explicaba que, tras la dimisión de Mesa, «existen noticias fiables de que un grupo de generales se reunió para decidir qué era lo que iban a apoyar y que, durante las deliberaciones, un coronel entró en la sala, picó de talones y dijo: “Creo que deberían saber que muchos oficiales piensan que el MAS es el único representante adecuado de la dignidad de nuestra nación”».

A mediados de la década de 1960, el Pacto Militar-Campesino —una alianza en la que los campesinos, a través de sindicatos paraestatales, quedaban subordinados al Gobierno militar de René Barrientos— explotó a los campesinos como base social de la dictadura de derechas del general Barrientos, entre 1964 y 1969. Esta vez, Morales está intentando revertir esa fórmula para crear una base social sólida para su Gobierno, lo que quedó simbolizado en la marcha indígena-militar del 6 de agosto para inaugurar la Asamblea Constituyente. Campesinos de las regiones más remotas del país recibieron instrucción militar rápida para encabezar el desfile.

En enero de este año, Morales llamó a los «Ponchos Rojos» del altiplano a tomar nuevamente sus Máuser, muchos de ellos reliquias de la Revolución Nacional de 1952, y defender el proceso al lado de los militares. Nadie está dispuesto a afirmar que el ejército, que ha protagonizado más de 180 golpes desde 1825, haya experimentado una transformación decisiva. Lo único que existe son especulaciones sobre si el sector nacionalista ha logrado imponerse en la institución, sobre cuál es la fuerza de la facción de derechas que, indudablemente, sigue existiendo, y sobre cuál sería el comportamiento del sector intermedio si hubiera de enfrentarse a la posible partición de Bolivia.

Lo crucial es que Morales ha seguido organizando y reforzando sus apoyos entre su principal base social. De importancia central para su estrategia han sido los avances en la esfera económica: la nacionalización del gas, medida que cuenta con el apoyo de más del 80% de la población. Aunque hay quien ha criticado la medida por demasiado moderada, Morales no ha dejado de señalar que la nacionalización es un proceso cuyo objetivo es la reconstrucción de la compañía petrolera estatal, YPF, la ampliación de la intervención del Estado a toda la cadena productiva y el aumento de la industrialización gasística. Morales ha afirmado que el proceso solo puede avanzar con la movilización constante de las personas. Para asegurarse que eso sea así, Morales se ha dedicado a distribuir personalmente los frutos de la nacionalización con viajes semanales a numerosas zonas rurales para hacer entrega de tierras y tractores y para inaugurar nuevos programas de alfabetización y de asistencia sanitaria.

A pesar de los seis meses de fuertes resistencias por parte de las multinacionales del gas, resistencias que forzaron la dimisión del primer ministro de hidrocarburos del Gobierno de Morales, Andrés Soliz Rada, las doce compañías han firmado nuevos contratos. Los nuevos contratos del gas, firmados el 28 de octubre de 2006, generaron una ola de aprobación del Gobierno. Los controles harán que la recaudación procedente del gas aumente de los 608 millones de dólares de 2005 a 1.261 millones en 2006 y, según los cálculos, 1.572 millones en 2007, para sobrepasar los 6.000 millones en los próximos cuatro años. Gracias al aumento del apoyo cosechado, Morales ha podido aprobar su «revolución agraria» y aprobar los nuevos contratos gasísticos el 28 de noviembre, a pesar del boicot de la oposición al Senado.

Aprovechando un error en el proceso de aprobación de los contratos en el Congreso, la oposición lanzó un nuevo contraataque durante marzo y abril. Gracias a su mayoría en el Senado y al control de los medios de comunicación de masas, la oposición intentó bloquear la aprobación de los contratos cuando estos tenían que volver a pasar por el Congreso, además de lanzar un feroz ataque contra el Gobierno del MAS por provocar «daños económicos al Estado». Todo ello implicaría un intento por parte de la oposición de adoptar un disfraz nacionalista. Aunque el Congreso ha aprobado ya los contratos (por unanimidad), las multinacionales del gas siguen interviniendo con agresividad en un intento de poner freno al proceso. El 24 de enero de 2007, el presidente brasileño, Luis Inácio «Lula» da Silva, anunciaba que su país, en nombre de Petrobras, exigiría 215 millones de dólares por dos refinerías de petróleo que Bolivia pretende nacionalizar. Son las mismas refinerías que le costaron el puesto ministerial a Soliz Rada

después de adoptar una postura «de línea dura» con respecto a su expropiación. Siguiendo adelante con su programa de nacionalización, el Gobierno de Morales se negó a pagar más de 112 millones de dólares (algo más del precio pagado por Petrobras para adquirir las refinerías en 1994, durante el impulso privatizador del primer Gobierno de Sánchez de Lozada), precio con el que Petrobras acabó cediendo.

Por el contrario, los proyectos de integración entre Bolivia y Venezuela están sentando los cimientos para la industrialización en el sector del gas, como parte del proyecto de Petrosur de unión de las empresas petroleras y del gas de Latinoamérica para evitar el control imperialista de dichos recursos.

Ha habido avances en el proceso de renacionalización de la industria minera, aunque también estos han puesto de manifiesto algunos de los obstáculos a los que se enfrenta la revolución. A principios de octubre de 2006, los trabajadores de las cooperativas se enfrentaron con los trabajadores empleados por COMIBOL, la empresa minera estatal, por el control de la mayor mina de Bolivia. Walter Villaroel, ex presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), que había accedido al ministerio gracias al pacto firmado entre FENCOMIN y el MAS, tuvo un papel clave en el desencadenamiento de la crisis, al anteponer los intereses de su sector a las necesidades del proyecto del Gobierno. El carácter corporativo de los movimientos sociales bolivianos, muchos de los cuales, pasados los momentos de crisis, se retiran a defender sus propios intereses sectoriales, ha dado algunos problemas cuando los representantes de dichos movimientos han ocupado ministerios.

Villaroel fue obligado a dimitir y Guillermo Dalance, antiguo empleado de COMIBOL, ocupó su puesto. Dalance tiró adelante la incorporación de 4.000 trabajadores de las cooperativas de Huanani en COMIBOL, y estos se sumaron a los 1.000 que ya empleaba la empresa. Así, el Gobierno recuperó el control operativo de la Compañía Minera de Huanani.

La recuperación de la fundición de estaño Vinto en febrero de 2007 supuso un nuevo paso adelante en el proceso de nacionalización. Sin embargo, la visita no autorizada de Dalance a Cuba para firmar un acuerdo minero en el marco del ALBA provocó su dimisión forzosa, así como un estancamiento temporal del proceso. El reto de mejorar la coordinación entre el presidente y sus ministros ha sido difícil. No obstante, el secreto que envuelve las razones para la dimisión de Dalance y el constante cambio de equipo, no solo en el sector minero, sino también en el de los hidrocarburos (en el primer año de gobierno de Morales ha habido cuatro presidentes distintos de YPF), indican los obstáculos existentes para poder establecer estrategias a largo plazo, sobre todo en esos dos sectores clave.

Reflejan también la falta de un cuadro técnico patriótico capaz de avanzar en las diferentes áreas del proyecto del MAS.

A todos esos problemas cabe añadir la falta de espacios adecuados para que el Gobierno y los movimientos sociales discutan las estrategias a fin de desarrollar una línea clara a seguir. Gran parte del primer año de gobierno ha dependido considerablemente de Morales para la resolución ordinaria de problemas, en lugar de desarrollar un plan de estratégico de gobierno claramente articulado. La propia naturaleza del MAS, que es más una difusa confederación de movimientos sociales e ideologías que un partido político, exacerba el problema, ya que se otorga prioridad a la creación de alianzas corporativas, más que a lograr una verdadera unidad política. En las zonas rurales, los centros políticos del MAS están constituidos por las estructuras de los movimientos campesinos, mientras que en las áreas urbanas, las ramas del MAS están dominadas por relaciones clientelistas y elementos oportunistas que buscan un puesto en la burocracia estatal.¹⁰ El espacio para la resolución democrática de todas esas tensiones está limitado por las actuales estructuras del MAS. La creación de la Coalición Nacional para el Cambio, en la que participan representantes de los ministerios, del Congreso, de la Asamblea Constituyente y de los movimientos sociales, podría ser la respuesta a tales dificultades.

La batalla por un nuevo Estado boliviano

El punto más caliente ha sido la instauración de la Asamblea Constituyente, con la cual los movimientos esperan «constitucionalizar» los avances realizados hasta la fecha, y de la que esperan que surja una nueva Bolivia. Esa nueva Bolivia estaría basada en el reconocimiento de la mayoría indígena mediante un Estado unido, plurinacional, descentralizado, social y comunitario. El poder de toma de decisiones lo ejercerían los indígenas y los movimientos sociales mediante la creación de un poder social comunitario.¹¹ Un Estado así sería «el actor principal en la planificación y la producción económica e impondría una política de distribución igualitaria de los beneficios», y controlaría todos los recursos no-renovables junto a las comunidades indígenas que habitan en las regiones. Fundamentalmente, el objetivo es crear un nuevo poder estatal a través del cual las mayorías indígenas puedan ejercer el papel que por derecho les corresponde en la sociedad boliviana.

Al blandir la bandera de la «democracia» y discutir la definición de la mayoría de dos tercios que exige la Asamblea Constituyente para adoptar

un borrador de constitución, la oposición se ha dedicado frenéticamente a estrangular toda posibilidad de transformación radical a través de dicha institución. El MAS ha sostenido que la ley solo exige que el texto final sea aprobado por dos tercios de los participantes, y los artículos individuales requieren la aprobación del 50% más uno de los votos. En los primeros seis meses de un plazo total de doce meses, la Asamblea Constituyente ha entrado en punto muerto, ya que la oposición se ha negado a ceder ni un ápice con respecto a las reglas y normativas de debate dentro de la Asamblea. Los llamamientos de la oposición a la «democracia» apuntan a un intento de esta por llegar a la zona del oeste del país, ya que su ofensiva autonomista no ejercía ninguna atracción fuera de la base ya consolidada de la derecha en el este del país. La combinación de manifestaciones en las calles, una campaña concertada en los medios de comunicación y los problemas creados en la Asamblea Constituyente parece que ha dado sus frutos a la hora de hacer que un sector de las clases medias urbanas se pase a la oposición.

Enfrentada a ese dilema, la dirección de Morales ha optado por un cambio de táctica que se ha reflejado en la creciente importancia de la línea de García Linera: evitar el discurso radical innecesario, esforzarse por lograr el consenso a fin de seguir avanzado y recuperar a las clases medias.¹² El cambio de política ha venido marcado por la propuesta del MAS para salir del punto muerto en que se halla la Asamblea Constituyente: todo artículo que no sea aprobado por dos tercios irá por separado al referéndum popular sobre la nueva constitución. Además, se ha producido también un cambio en la postura oficial sobre la espinosa cuestión de la autonomía regional y se ha pasado a apoyar una autonomía basada en la solidaridad, en el marco de la unidad nacional, el conocimiento entre las regiones y de los pueblos indígenas.¹³ Ha habido igualmente cambios en los ministros más cuestionados.¹⁴

Más que una retirada política, todos esos pasos son un reflejo del equilibrio actual de fuerzas en Bolivia. Parte de la lucha política actual responde a la necesidad de proyectar un curso viable y convincente de defensa de la integridad territorial del país, en respuesta a las amenazas de desintegración, así como a la necesidad de generar estabilidad social. Todas esas cuestiones pesan considerablemente en la mente de los elementos de clase media y de importantes sectores de las fuerzas armadas. Todo eso hace que cobre peso también la necesidad de concentrarse en aumentar la amplitud de la lucha política contra la derecha. La derecha, bien consciente de ello, intenta evitar el enfrentamiento político y se centra en la provocación, la violencia callejera y las amenazas de desafiar a la autoridad constitucional en todos los lugares en los que tiene fuerza para ello.

Está claro que el proceso de cambio que está experimentando Bolivia actualmente bajo la dirección de los movimientos sociales y del MAS es el único proyecto realmente nacional para el país. La capacidad del MAS para articular las aspiraciones de los movimientos sociales radicales del oeste y del este (que, política y organizativamente, han madurado a ritmo mucho más lento y se encuentran en una posición de vulnerabilidad) y de consolidar el apoyo de las clases medias es crucial para el avance del proyecto. Hasta el momento, las pocas protestas «radicales» aisladas que se han producido fuera del MAS han sido de carácter corporativo y han criticado al Gobierno por no hacer lo suficiente, lo que prueba que no existe ningún proyecto alternativo viable de izquierdas.

Mientras se prepara para futuros y más fuertes enfrentamientos, la derecha está intentado claramente en la actualidad debilitar ese frente sembrando el miedo entre las clases medias para después acogerlas en sus brazos, fomentando la desmoralización mediante el estancamiento del proceso y provocando a los sectores radicales para que entren en confrontaciones innecesarias. Los líderes del MAS se enfrentan a un difícil desafío: mantener la unión de los diferentes movimientos sociales y la clase media y movilizarlos tras un proyecto común de liberación. El próximo periodo de debates en la Asamblea Constituyente, acompañado de la movilización en las calles de los movimientos sociales, será crucial para determinar si la vía que se está trazando actualmente llevará al país a una nueva Bolivia o al abismo.

Notas

1. «Bolivia-Perú», *Rebellion*, 4 de enero de 2006.
2. Alison Spedding, *Kawsachun coca*, PIEB, La Paz, 2005.
3. La CSUTCB se creó como consecuencia de la ruptura del Pacto Militar Campesino en el que se apoyaron muchos de los dictadores de derechas de las décadas de 1960 y 1970. Surgió básicamente a partir de la lucha de los aymara, que se negaban a ser integrados mediante su transformación en «campesinos» y se seguían aferrando a su identidad indígena.
4. Lo que hoy se conoce como «katarismo» apareció en el altiplano entre los aymara urbanos como parte de la resurgencia de la identidad indígena expresada en los eslóganes «somos extranjeros en nuestro propio país» y «somos explotados como campesinos y oprimidos como pueblos indígenas».
5. Pablo Stefanoni y Herve Do Alto, *Evo Morales*, Malatesta, La Paz, 2006.
6. Stefanoni y Do Alto, *Evo Morales*.
7. «Bolivia: Neoliberal Era about to End?», *Green Left Weekly*, 30 de noviembre de 2005.
8. *Informe del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en su primer año de gestión*, 22 de enero de 2007, <http://abi.bo>.
9. «Bolivia: The Military Plan and Wait», *Le Monde Diplomatique*, febrero de 2006.

10. «Bolivia: The Two Blocs within MAS», *Green Left Weekly*, 27 de septiembre de 2006.
11. *Visión de país*, MAS-IPSP, marzo de 2007.
12. «Vamos a corregir las señales erradas», *La Prensa*, 7 de febrero de 2007.
13. Álvaro García Linera, vicepresidente de la República, «Fue un error no liderar el pedido autonómico», *El Deber*, 21 de enero de 2007.
14. «Vamos a corregir las señales erradas», *La Prensa*, 7 de febrero de 2007.